

ANÁLISIS DE LA SANCIÓN A IMPONER EN PROCESOS DE MÍNIMA  
CUANTÍA POR LA INASISTENCIA DE LAS PARTES O SUS APODERADOS  
A LA AUDIENCIA INICIAL DEL ARTICULO 372 DEL CÓDIGO GENERAL  
DEL PROCESO



Presentado por  
CAROLINA SERRANO  
LUIS FERNANDO SANTAELLA  
DANIEL ALEJANDRO HUERTAS

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
FACULTAD DE CIENCIAS, JURÍDICAS Y SOCIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL  
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2018

ANÁLISIS DE LA SANCIÓN A IMPONER EN PROCESOS DE MÍNIMA  
CUANTÍA POR LA INASISTENCIA DE LAS PARTES O SUS APODERADOS  
A LA AUDIENCIA INICIAL DEL ARTICULO 372 DEL CÓDIGO GENERAL  
DEL PROCESO



Presentado por  
CAROLINA SERRANO  
LUIS FERNANDO SANTAELLA  
DANIEL ALEJANDRO HUERTAS

Trabajo presentado como requisito para optar al título de  
Especialista en Derecho Procesal

Asesor disciplinar  
Dra. CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
FACULTAD DE CIENCIAS, JURÍDICAS Y SOCIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL  
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2018

# ANÁLISIS DE LA SANCIÓN A IMPONER EN PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA INASISTENCIA DE LAS PARTES O SUS APODERADOS A LA AUDIENCIA INICIAL DEL ARTICULO 372 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

## Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la sanción a imponer en procesos de mínima cuantía por la inasistencia de las partes o sus apoderados a la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta las pretensiones patrimoniales. Corresponde a un estudio cualitativo de tipo jurídico aplicado en el que se exploraron trece sentencias emitidas por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del municipio de San José de Cúcuta en el 2018. Se analizan los montos de las sanciones pecuniarias impuestas de manera comparativa con las pretensiones patrimoniales y con la aplicación de reglas procesales afines contenidas dentro otros estatutos procesales (contencioso administrativo y laboral). Los resultados muestran que la sanción pecuniaria contenida en el Código General del Proceso resulta desproporcional frente a las pretensiones en la mayoría de los procesos analizados, además de una injustificada diferenciación y tratamiento de la conducta que se busca sancionar respecto de los otros estatutos procesales. Se sugiere la unificación de criterios dentro del ordenamiento jurídico, el establecimiento de una sanción de un salario mínimo siguiendo el principio de igualdad que rige el Derecho o la definición de una sanción variable que sea impuesta por el juez según cada caso.

**Palabras clave:** *derecho procesal, proceso judicial, sanción, inasistencia, proceso de mínima cuantía.*

## **Abstract**

The objective of this article is to analyze the sanction to be imposed in processes of minimum amount for the failure of the parties or their representatives to the initial hearing referred to in article 372 of the General Code of the Process, taking into account the economic claims. Corresponds to a qualitative study of legal type applied in which thirteen sentences were explored issued by the First Court of Small Causes and Multiple Competence of the municipality of San José de Cúcuta in 2018. The amounts of the pecuniary sanctions imposed in a comparative manner are analyzed with the patrimonial pretensions and with the application of related procedural rules contained in other procedural statutes (administrative and labor litigation). The results show that the pecuniary sanction contained in the General Process Code is disproportionate to the claims in most of the processes analyzed, in addition to an unjustified differentiation and treatment of the conduct that is sought to be sanctioned with respect to the other procedural statutes. It is suggested the unification of criteria within the legal system, the establishment of a sanction of a minimum wage following the principle of equality that governs the law or the definition of a variable sanction that is imposed by the judge according to each case.

**Keywords:** *procedural law, judicial process, sanction, non-attendance, minimum amount process.*

## **Introducción**

Con la expedición del de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso (en adelante CGP) se buscó regular de manera alternativa la actividad procesal en los ámbitos civil, agrario, comercial y familia, así como otros temas jurisdiccionales de manera indirecta (Cruz, 2017), y siguiendo los criterios de

reducción y concentración de las actuaciones procesales (Rueda, 2017). De acuerdo al Proyecto de Ley que dio vida al CGP, el objetivo de este cuerpo normativo era ofrecer “un estatuto procesal integral ajustado a las necesidades de nuestro contexto social” y que permitiera, por un lado, un tratamiento adecuado y pertinente a las controversias judiciales de naturaleza civil, comercial, agraria y familia, y por otro, la integración de normas del régimen procesal -penal, laboral, administrativo- a fin de llenar vacíos presentes (Proyecto de Ley 159, 2011 Senado / Proyecto de Ley 196, 2011 Cámara).

Adicionalmente, el Proyecto de Ley citado menciona la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia como instrumento requerido para la materialización efectiva de los principios, valores y derechos constitucionales, y en esa medida, se requiere de un régimen procesal que permita enfrentar los problemas de ineficiencia y congestión. Por último, resulta importante exaltar la urgencia de “ofrecer a los sujetos que en él intervienen un contexto que permita alcanzar la mejor solución posible a las controversias que se presenten entre los distintos sujetos de derecho”. De acuerdo a lo anterior, el CGP tuvo como principal objetivo asegurar un régimen procesal que hiciera frente a diversos problemas y limitaciones propios de la Administración de Justicia en Colombia facilitando un mayor acceso a la justicia de los ciudadanos y la tutela de sus derechos (Garzón, 2017). Como bien lo describe Canosa (2017):

Estas modificaciones tienen diversos propósitos prácticos, entre ellos armonizar las normas procesales con la Carta Política de 1991, facilitar la aplicación de la oralidad y el acceso a la administración de justicia, asegurar la eficacia, esto es, la materialización de los derechos reconocidos por la ley sustancial, desterrar formalismos excesivos, innecesarios e irrazonables. (p. 133)

La legislación y la doctrina reconocen en el actual CGP una estructura caracterizada por el desarrollo de audiencias y la implementación de un sistema mixto, aunque con especial énfasis de la oralidad (Garzón, 2017). En efecto, por un lado, trae implícito una etapa escritural relacionada con la activación del proceso a partir de la demanda y su respectiva contestación, y por otro, un conjunto de etapas guiadas por la oralidad, y en donde se encuentra la audiencia inicial, y de requerirse, la audiencia de instrucción y juzgamiento cuando se advierta la necesidad de práctica de pruebas.

En materia civil, tanto el Proceso Declarativo Verbal Sumario regulado en el capítulo I del título II del CGP como los Procesos Ejecutivos de la sección II del título único, tratan asuntos del conocimiento de todas aquellas cuestiones contenciosas de mínima cuantía, las cuales se establecen de conformidad con el artículo 25, esto es, aquellas pretensiones patrimoniales que no exceden los 40 salarios mínimos. En estos procesos, se aplica una única instancia y se prevé la aplicación de reglas flexibles, por ejemplo, la instauración de la demanda bien por medio escrito o bien de manera oral, o la facultad de accionar el sistema judicial sin necesidad de apoderado.

Con la entrada en vigencia del CGP, aumentaron los procesos declarativos y ejecutivos de mínima cuantía en los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, y la reducción de los tiempos procesales para este tipo de causas (Corporación Excelencia en la Justicia, 2013; Consejo Superior de la Judicatura, 2016). Ello se debe a la flexibilidad de los mismos y a la mejora de las capacidades y oportunidades de los ciudadanos para hacer exigibles los derechos y obligaciones insolutas convenidas con terceros, y claro está, al valor de las pretensiones y la posibilidad de impulsarlo en causa propia y no requerir los servicios profesionales de un abogado.

Sin duda, se trata de una mejora en la Administración de Justicia al abandonar estructuras rígidas, en especial, para aquellos procesos con pretensiones mínimas pero que de igual forma resultan de interés para los ciudadanos. Sin embargo, y como la práctica del Derecho no corresponde a una ciencia universal bajo la lógica positivista sino a una ciencia social que se renueva de forma permanente conforme a los cambios y las transformaciones jurídico-sociales (Diéguez, 2011; Mabel, 2011), resulta lógico que en la aplicación del CGP en lo que respecta al Proceso Declarativo Verbal Sumario y el Proceso Ejecutivo se presenten inconvenientes y retos frente a determinados aspectos de naturaleza adjetiva. En efecto, las partes del proceso deben cumplir de manera estricta con los lineamientos y las reglas procedimentales *so pena* de incurrir en faltas y sanciones. En el caso del demandante y el demandado, el estatuto procesal advierte reglas, oportunidades y formalidades que estos deben cumplir, pues como bien se advierte en la doctrina, el éxito del proceso depende de forma íntegra de todas las partes (Larroucau, 2010), y *a contrario sensu* se producen consecuencias para el actor que incumple con la norma procesal. Un ejemplo de ello es la sanción que se impone a partir del inciso 5º numeral 4º del artículo 372 del CGP relacionada con la audiencia inicial:

Artículo 372. El juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas: 4. Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. [...] A la

parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

Como se observa en la norma transcrita, a la parte o el apoderado que deje de asistir de manera injustificada a la audiencia inicial se le impondrá una multa de cinco (5) salarios mínimos (Azula, 2016), y este es el tema central de esta investigación, dado que mencionada sanción pecuniaria desborda el principio de proporcionalidad en los procesos verbales sumarios y ejecutivos de mínima cuantía, toda vez que las multas en algunas ocasiones sobrepasan las pretensiones económicas de las partes dentro del proceso impulsado, dejando de lado la finalidad social del estado en garantizar con efectividad derechos, deberes y principios consagrados en la Carta Política de 1991.

La inasistencia injustificada a las actuaciones y audiencias de forma lógica producen consecuencias negativas para los sujetos procesales, y dichas repercusiones son de varios tipos. Por un lado, se encuentran aquellas en las que la inasistencia conlleva a efectos dentro del ámbito probatorio:

La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. (Art. 372, Núm. 4º, Inc. 1º)

Y por otro lado, se encuentran las consecuencias materializadas en las sanciones pecuniarias, y con el objetivo de evitar las repercusiones negativas se debe presentar prueba sumaria con el objetivo de justificar la inasistencia. En otras palabras, tanto asistencia como inasistencia se encuentran reguladas por la norma. Como bien lo expresa Ulises (2013):



[...] como en el proceso oral la presencia de los sujetos es indispensable, la inasistencia a la audiencia inicial se encuentra estrictamente regulada y sancionada con multa de cinco (5) smlmv. La justificación de la inasistencia antes de la audiencia inicial requiere prueba sumaria. Si se excusan la parte y su apoderado o solo la parte y el juez acepta la justificación, se aplaza la audiencia mediante auto sin recursos, para dentro de los diez (10) días siguientes, sin que proceda otro aplazamiento (p. 56).

Una manera de dar respuesta a la desproporcionada sanción del artículo 372 del CGP que se presenta para algunos casos es tasar la sanción teniendo como base el valor de las pretensiones. Y es que en efecto, hay casos en los que se persiguen pretensiones que representan menos de un (1) salario mínimo y que se tramitan a través del Proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía y/o Proceso Verbal Sumario, y que al imponerse la sanción descrita en la norma citada supera las cuantías de las pretensiones demandadas. Y se trata de una situación común que se presenta en la práctica y que puede obedecer a diferentes causas, una de estas la falta de conocimiento de los sujetos procesales sobre la Ley, pues como sucede en los procesos ya descritos, no se requiere de apoderado para accionar la Administración de Justicia. Entonces, se observa que el legislador impuso al juez la ardua tarea de sancionar con alto de grado de lesividad y desproporcionalidad, la falta de la inasistencia injustificada de la audiencia inicial del artículo 372 del CGP que en muchos casos resulta aún más injusta considerándose los ingresos que perciben los actores procesales y que terminan afectando el mínimo vital (Sentencia T-199, 2016, 26 de abril).

## **Pregunta de investigación**

¿Cuáles son los efectos de definir una gradualidad de la multa contemplada en el artículo 372 de la Ley 1564 de 2012, al modificar el numeral 4 en cuanto a tasar la sanción pecuniaria, acorde al monto de la pretensión patrimonial oscilando la misma entre uno y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes?

## **Objetivo de la investigación**

Analizar la sanción a imponer en procesos de mínima cuantía por la inasistencia de las partes o sus apoderados a la audiencia inicial, de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso teniendo en cuenta las pretensiones patrimoniales.

## **Método**

Corresponde a un estudio cualitativo de tipo jurídico. Los estudios cualitativos se caracterizan por interpretar los fenómenos a partir de datos descriptivos. Como bien lo expresa Quecedo y Castaño (2002): “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 7). A diferencia de los estudios cuantitativos, la investigación cualitativa no se interesa por el control de variables y los análisis estadísticos, sino en la comprensión de las realidades objeto de análisis. Por otro lado, la investigación jurídica corresponde a aquellos estudios que tratan sobre el Derecho “y que no pertenezca a ninguna otra disciplina” (Sánchez, 2009, p. 2). Ahora bien, en la investigación jurídica se reconocen dos tipos de estudios: la investigación jurídica básica y la investigación jurídica aplicada. Conforme a los objetivos de esta investigación, y debido a que la misma parte de datos localizados a partir

del análisis de un conjunto de sentencias proferidas por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del municipio de San José de Cúcuta, se trata de una investigación jurídica aplicada:

[...] la investigación aplicada, es fundamentalmente aquel tipo de investigación que tiene sus raíces en el lenguaje de Durkheim en los *hechos sociales*; o como diría Weber en la *acción social*. Adicionalmente se conoce este modelo de investigación, como investigación empírica o práctica, o del mundo del ser y no del deber ser. Este segundo tipo de investigación, es de acción, pues depende de la realidad fáctica; es concreta, es utilitaria, de ahí que el conocimiento científico que se busca, no solo interactúe con el objeto de estudio, sino que trate de resolver situaciones puntuales de la realidad de ese objeto de estudio. (Rodríguez, 2014, p. 9)

En este estudio no se cuenta con población ni muestra, sino con un conjunto de unidades de análisis representadas en trece (13) sentencias proferidas durante el 2018 de procesos iniciados en el 2016 y 2017 dentro del Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple ubicado en el barrio La Libertad del municipio de San José de Cúcuta. Las sentencias seleccionadas cumplen con el criterio de haber sancionado a las partes y/o sus apoderados por inasistencia injustificada.

Tabla 1. Identificación de las sentencias seleccionadas del Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple - 2018

| No | Radicado              | Fecha     | Tipo de proceso      |
|----|-----------------------|-----------|----------------------|
| 1  | 540014189001201600821 | 25/1/2018 | Rendición de cuentas |
| 2  | 540014189001201700956 | 16/3/2018 | Ejecutivo            |
| 3  | 540014189001201700958 | 17/4/2018 | Ejecutivo            |
| 4  | 540014189001201700147 | 27/4/2018 | Ejecutivo            |

|    |                       |           |           |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 5  | 540014189001201700671 | 27/4/2018 | Ejecutivo |
| 6  | 540014189001201700123 | 19/4/2018 | Ejecutivo |
| 7  | 540014189002201600821 | 26/4/2018 | Monitoreo |
| 8  | 540014189001201600421 | 13/7/2018 | Ejecutivo |
| 9  | 540014189001201700815 | 17/7/2018 | Ejecutivo |
| 10 | 540014189001201700386 | 23/7/2018 | Ejecutivo |
| 11 | 540014189001201701262 | 6/9/2018  | Ejecutivo |
| 12 | 540014189001201600523 | 13/9/2018 | Ejecutivo |
| 13 | 540014189001201701468 | 26/9/2018 | Ejecutivo |

Fuente: Autores

El procedimiento seguido para el análisis de los datos y el desarrollo del estudio es el siguiente: 1. Se extraen de las sentencias seleccionadas su debida identificación (radicado, clase de proceso, sujeto procesal sancionado), el valor de las pretensiones en pesos y salarios mínimos, y el valor de la sanción conforme al CGP, 2. Se analiza la información recolectada y sistematizada, 3. Se comparan las sanciones de otros estatutos procesales considerando las reglas establecidas para la inasistencia injustificada teniendo como base las pretensiones de las sentencias seleccionadas, 4. Se realiza el respectivo análisis de la información comparada según estatutos procesales, y 5. Se describen las posibles soluciones aplicables para lograr una sanción pecuniaria conforme a las pretensiones.

### **Esquema de resolución del problema**

*1. Las sanciones pecuniarias por inasistencia a la audiencia inicial en los Procesos Declarativos Verbal Sumario y Proceso Ejecutivo de mínima cuantía a la luz de las pretensiones. 2. Comparativo de sanciones frente a otros regímenes procesales: laboral y contencioso administrativo. 3. Posibilidades*

*para enfrentar el problema socio-jurídico de la sanción por injustificada inasistencia del artículo 372 del CGP.*

## **Plan de redacción**

### ***Las sanciones pecuniarias por inasistencia a la audiencia inicial en los Procesos Declarativos Verbal Sumario y Proceso Ejecutivo de mínima cuantía a la luz de las pretensiones***

Para analizar y evidenciar la posible desproporcionalidad de las sanciones pecuniarias por inasistencia injustificada a la audiencia inicial del artículo 372 del CGP, se recurre a la revisión de trece (13) sentencias emitidas por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del municipio de San José de Cúcuta conforme a lo descrito en la metodología. En la tabla 2 se muestran las sanciones pecuniarias que se han impuesto en los trece procesos seleccionados en comparación con las pretensiones demandadas. Los valores se expresan allí en salarios mínimos y porcentajes y luego en la figura 1 se muestra el promedio de las pretensiones frente al promedio de las sanciones pecuniarias.

**Tabla 2. Comportamiento del equivalente en términos porcentuales de la sanción por inasistencia con respecto a las pretensiones patrimoniales demandadas conforme a la Ley 1564 de 2012**

| RADICADO  | CLASE DE PROCESO     | PARTE       | PRETENCIONES PATRIMONIALES |             |          | SANCIÓN PECUNARIA ART. 372 CGP | % QUE REPRESENTA LA SANCION SOBRE LA PRETENCIÓN |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|--------------------------------|---|
|           |                      |             | EN PESOS                   | V//R SMLMMV | EN SMLMV |                                |   |
| 2016-0523 | EJECUTIVO            | DEMANDANTE  | 2.522.000                  | 689.454     | 3,66     | 5,00                           | 136,69%   |
| 2016-0821 | RENDICIÓN DE CUENTAS | DEMANDANTES | 9.000.000                  | 689.454     | 13,05    | 5,00                           | 38,30%  |
| 2017-0147 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 16.586.000                 | 737.717     | 22,48    | 5,00                           | 22,24%  |
| 2017-0956 | EJECUTIVO            | DEMANDADA   | 2.000.000                  | 737.717     | 2,71     | 5,00                           | 184,43%   |
| 2017-0123 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 6.000.000                  | 737.717     | 8,13     | 5,00                           | 61,48%  |

|           |           |            |            |         |       |      |         |
|-----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|---------|
| 2017-0671 | EJECUTIVO | DEMANDADOS | 7.200.000  | 737.717 | 9,76  | 5,00 | 51,23%  |
| 2017-0958 | EJECUTIVO | DEMANDADA  | 6.000.000  | 737.717 | 8,13  | 5,00 | 61,48%  |
| 2016-0821 | MONITORIO | DEMANDADOS | 6.100.000  | 689.454 | 8,85  | 5,00 | 56,51%  |
| 2016-0421 | EJECUTIVO | DEMANDADA  | 3.031.797  | 689.454 | 4,40  | 5,00 | 113,70% |
| 2017-0815 | EJECUTIVO | DEMANDADO  | 1.500.000  | 737.717 | 2,03  | 5,00 | 245,91% |
| 2017-0386 | EJECUTIVO | DEMANDADO  | 21.023.454 | 737.717 | 28,50 | 5,00 | 17,55%  |
| 2016-0821 | EJECUTIVO | DEMANDADO  | -          | -       | -     | -    | -       |
| 2017-1262 | EJECUTIVO | DEMANDANTE | 13.295.801 | 737.717 | 18,02 | 5,00 | 27,74%  |
| PROMEDIO  |           |            | 7.854.921  |         | 10,81 | 5,00 | 84,77%  |

Fuente: Autores a partir de sentencias consultadas

La tabla 2 muestra como algunos procesos en los cuales se ha aplicado la sanción del artículo 372 del CGP por inasistencia injustificada a la audiencia inicial superan el 100% de las pretensiones, y en uno de los casos llega a representar el 245% de las pretensiones, lo cual termina siendo desproporcional para los sujetos procesales. Así mismo, resulta esencial observar que en uno de estos casos, la multa fue impuesta al demandante. Del mismo modo, se puede identificar otras cuatro sentencias en las que las sanciones superan en un 50% las pretensiones demandadas. Sólo en cuatro sentencias las sanciones representan menos del 40% de las pretensiones, aunque sigue siendo altas estimando las pretensiones. En ninguno de los casos, las sanciones se encuentran por debajo del 15% de las pretensiones.

De acuerdo a la figura 1 en promedio las pretensiones patrimoniales son del orden de \$7.845.921 y su equivalente de 10,81 smlmv, las cuales al compararse con la sanciones pecuniaria por la inasistencia injustificada a la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del CGP, representan el 84,77% de las pretensiones patrimoniales demandadas.

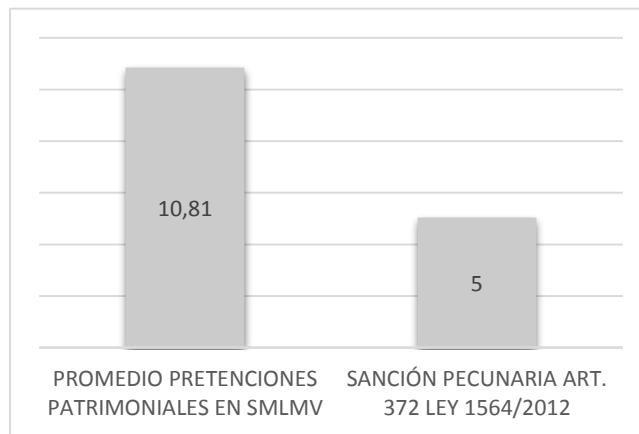


Figura 1. Comportamiento del equivalente en términos porcentuales de la sanción por inasistencia con respecto a las pretensiones patrimoniales demandadas conforme a la ley 1564 de 2012  
Fuente: Autores

Sin embargo, no se trata de abandonar las sanciones o que se excluyan todas las formas de castigo que se deben imponer por las faltas de los sujetos procesales en la aplicación del Derecho adjetivo dentro de la Administración de Justicia. Y ello se sostiene en el fenómeno de la temeridad, pues la inasistencia a las audiencias, y así lo ha señalado la jurisprudencia (Flórez y Lema, 2011), puede ser manifestación de aquella práctica utilizada por los sujetos procesales para evitar que el proceso judicial cumpla su finalidad y desnaturalizándolo (Torres, 2011). La temeridad se ha prohibido dentro del ordenamiento jurídico procesal con el objetivo de “garantizar la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la administración de justicia” (Sentencia T-001, 2016, 13 de enero), pues las prácticas temerarias contradicen el principio de buena fe. Al respecto, ha señalado la Corte Constitucional que la actuación temeraria es:

[...] la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso. En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido

calificada por la Corte como aquella que supone una "actitud torticera", que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa", que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción",<sup>1</sup> o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia". (Sentencia T-009, 2000, 18 de enero)

Valga además señalar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con la inasistencia injustificada de la audiencia inicial del artículo 372 del CGP. Para la Corte la inasistencia comporta una conducta que trae repercusiones para el sujeto procesal porque así mismo lo ha dispuesto el legislador, pero también informa que esta conducta puede tener justificación, y frente a ello, el juez debe considerar cada caso de manera particular para evaluar la situación de fuerza mayor o caso fortuito. En ese sentido, no se trata de establecer una lista de eventos que pueden ser aplicados por los administradores de justicia para determinar la validez del caso fortuito o la fuerza mayor:

[...] deben ser evaluados en cada caso en particular -in concreto-, pues en estas materias conviene proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, *in casu*, ulteriormente se juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar [...]" (Sentencia de Casación 10840, 2018, 23 de agosto)

En ese orden de ideas, se debe encontrar un punto equilibrado con el objetivo de sancionar las inasistencias injustificadas pero de una manera proporcionada, es decir, sin que se convierta en un régimen procesal permisivo pero tampoco que se transforme en un proceso judicial que afecte de manera desproporcional a las partes. A continuación se hace un análisis de las



sanciones pecuniarias en el marco de otros regímenes procesales pero teniendo como base las pretensiones de los procesos ya analizados con el objetivo de reconocer si se mantiene el porcentaje de la sanción respecto de las pretensiones o si estas varían.

***Comparativo de sanciones frente a otros regímenes procesales: laboral y contencioso administrativo***

El numeral 4º del artículo 180 de la Ley 1437 (2011, 18 de enero) o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) expresa que frente a la audiencia inicial, la inasistencia injustificada se sanciona con dos (2) salarios mínimos al apoderado:

Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: [...] 4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como se observa, en este estatuto procesal se observan dos diferencias respecto del CGP. Por un lado, la sanción pecuniaria es impuesta al apoderado mientras que en el CGP -Proceso Declarativo Verbal Sumario/Proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía- la sanción es impuesta a la parte que no requiere de abogado para legitimar su actuación; y por otro, la sanción es inferior a la del CGP, pues pasa de cinco (5) a dos (2) salarios mínimos. Desde esa perspectiva, no se puede entender un trato diferencial cuando se trata de una misma conducta con connotaciones semejantes o naturaleza igual.

Ahora bien, con los mismos trece (13) procesos analizados en la primera sección, se calcula el valor de las sanciones siguiendo la regla establecida en el numeral 4º del artículo 180 del CPACA como se observa en la tabla 3 y figura 2.

**Cuadro 2. Comportamiento del equivalente en términos porcentuales de la sanción por inasistencia con respecto a las pretensiones patrimoniales demandadas conforme a la Ley 1437 de 2011**

| RADICADO  | CLASE DE PROCESO     | PARTE       | PRETENCIONES PATRIMONIALES |             |          | SANCIÓN PECUNARIA ART. 180 CPACA | % QUE REPRESENTA LA SANCION SOBRE LA PRETENCIÓN |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|----------------------------------|---|
|           |                      |             | EN PESOS                   | V//R SMLMMV | EN SMLMV |                                  |   |
| 2016-0523 | EJECUTIVO            | DEMANDANTE  | 2.522.000                  | 689.454     | 3,66     | 2,00                             | 54,68%  |
| 2016-0821 | RENDICIÓN DE CUENTAS | DEMANDANTES | 9.000.000                  | 689.454     | 13,05    | 2,00                             | 15,32%  |
| 2017-0147 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 16.586.000                 | 737.717     | 22,48    | 2,00                             | 8,90%   |
| 2017-0956 | EJECUTIVO            | DEMANDADA   | 2.000.000                  | 737.717     | 2,71     | 2,00                             | 73,77%  |
| 2017-0123 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 6.000.000                  | 737.717     | 8,13     | 2,00                             | 24,59%  |
| 2017-0671 | EJECUTIVO            | DEMANDADOS  | 7.200.000                  | 737.717     | 9,76     | 2,00                             | 20,49%  |
| 2017-0958 | EJECUTIVO            | DEMANDADA   | 6.000.000                  | 737.717     | 8,13     | 2,00                             | 24,59%  |
| 2016-0821 | MONITORIO            | DEMANDADOS  | 6.100.000                  | 689.454     | 8,85     | 2,00                             | 22,61%  |
| 2016-0421 | EJECUTIVO            | DEMANDADA   | 3.031.797                  | 689.454     | 4,40     | 2,00                             | 45,48%  |
| 2017-0815 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 1.500.000                  | 737.717     | 2,03     | 2,00                             | 98,36%  |
| 2017-0386 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 21.023.454                 | 737.717     | 28,50    | 2,00                             | 7,02%   |
| 2016-0821 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | -                          | -           | -        | -                                | -   |
| 2017-1262 | EJECUTIVO            | DEMANDANTE  | 13.295.801                 | 737.717     | 18,02    | 2,00                             | 11,10%  |
| PROMEDIO  |                      |             | 7.854.921                  |             | 10,81    | 2,00                             | 33,91%  |

Fuente: Autores a partir de sentencias consultadas

Como se observa, el porcentaje de las sanciones respecto de las pretensiones patrimoniales con aplicación de la regla normativa del CPACA

disminuyen de manera considerable al compararse con los resultados de la tabla 2, sin embargo, sigue siendo alta al menos para siete (7) procesos donde se supera el 24% de las pretensiones.

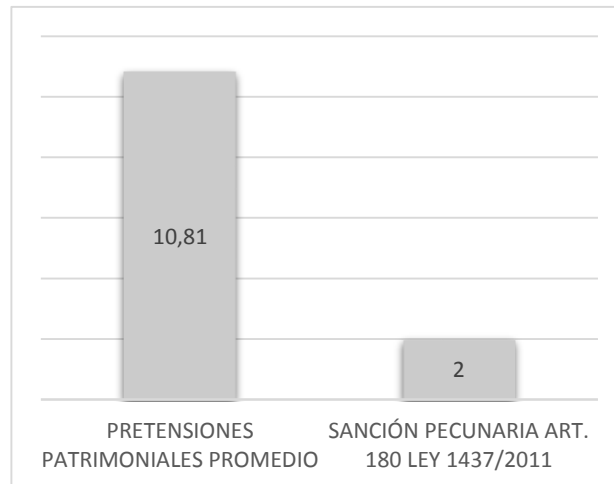


Figura 2. Comportamiento del equivalente en términos porcentuales de la sanción por inasistencia con respecto a las pretensiones patrimoniales demandadas conforme a la Ley 1437 de 2011

Fuente: Autores

La figura 2 muestra que en promedio las pretensiones patrimoniales son del orden de 10,81 smlmv la cual en comparación con la sanción pecuniaria por inasistencia a que refiere el artículo 180 Ley 1437 de 2011, esta representa el 33,91% de las pretensiones patrimoniales demandadas.

Ahora bien, el Decreto Ley 2158 (1948, 24 de junio) por el cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante CPTSS), y modificado por la Ley 712 (2001, 5 de diciembre) y la Ley 1149 (2011, 13 de julio), regula en el artículo 77 la audiencia obligatoria de conciliación decisiones de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Esta audiencia que tiene varias finalidades dentro del estatuto procesal laboral, expresa las sanciones por la audiencia de las partes. Por un lado, se encuentran aquellas de naturaleza probatoria o como indicio grave en contra de la parte, y por otro, la sanción pecuniaria la cual está fijada en un (1) salario mínimo:

Artículo 77. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda. [...] En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas: [...] 4. En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.

Bajo la lógica de la norma descrita en cuanto a la sanción pecuniaria por inasistencia injustificada, se puede observar lo mismo que con el CPACA. En efecto, no parece razonable la diferenciación que se hace sobre una conducta que mantiene igual identidad en cada uno de los estatutos procesales analizados. Aplicando esta regla procesal del CPTSS, se logra sistematizar los datos que aparecen en la tabla 4 y la figura 3 con base en los trece (13) procesos ya analizados con anterioridad:

Tabla 4. Comportamiento del equivalente en términos porcentuales de la sanción por inasistencia con respecto a las pretensiones patrimoniales demandadas conforme a la ley 1149 de 2007

| RADICADO  | CLASE DE PROCESO     | PARTE       | PRETENCIONES PATRIMONIALES |            |          | SANCIÓN PECUNARIA ART. 77 CPTSS | % QUE REPRESENTA LA SANCION SOBRE LA PRETENCIÓN |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------------|------------|----------|---------------------------------|---|
|           |                      |             | EN PESOS                   | V//R SMLMV | EN SMLMV |                                 |   |
| 2016-0523 | EJECUTIVO            | DEMANDANTE  | 2.522.000                  | 689.454    | 3,66     | 1,00                            | 27,34%  |
| 2016-0821 | RENDICIÓN DE CUENTAS | DEMANDANTES | 9.000.000                  | 689.454    | 13,05    | 1,00                            | 7,66%   |
| 2017-0147 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 16.586.000                 | 737.717    | 22,48    | 1,00                            | 4,45%   |
| 2017-0956 | EJECUTIVO            | DEMANDADA   | 2.000.000                  | 737.717    | 2,71     | 1,00                            | 36,89%  |
| 2017-0123 | EJECUTIVO            | DEMANDADO   | 6.000.000                  | 737.717    | 8,13     | 1,00                            | 12,30%  |

|           |           |            |            |         |       |      |        |
|-----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|--------|
| 2017-0671 | EJECUTIVO | DEMANDADOS | 7.200.000  | 737.717 | 9,76  | 1,00 | 10,25% |
| 2017-0958 | EJECUTIVO | DEMANDADA  | 6.000.000  | 737.717 | 8,13  | 1,00 | 12,30% |
| 2016-0821 | MONITORIO | DEMANDADOS | 6.100.000  | 689.454 | 8,85  | 1,00 | 11,30% |
| 2016-0421 | EJECUTIVO | DEMANDADA  | 3.031.797  | 689.454 | 4,40  | 1,00 | 22,74% |
| 2017-0815 | EJECUTIVO | DEMANDADO  | 1.500.000  | 737.717 | 2,03  | 1,00 | 49,18% |
| 2017-0386 | EJECUTIVO | DEMANDADO  | 21.023.454 | 737.717 | 28,50 | 1,00 | 3,51%  |
| 2016-0821 | EJECUTIVO | DEMANDADO  | -          | -       | -     | -    | -      |
| 2017-1262 | EJECUTIVO | DEMANDANTE | 13.295.801 | 737.717 | 18,02 | 1,00 | 5,55%  |
| PROMEDIO  |           |            | 7.854.921  |         | 10,81 | 1,00 | 16,95% |

Fuente: Autores a partir de sentencias consultadas

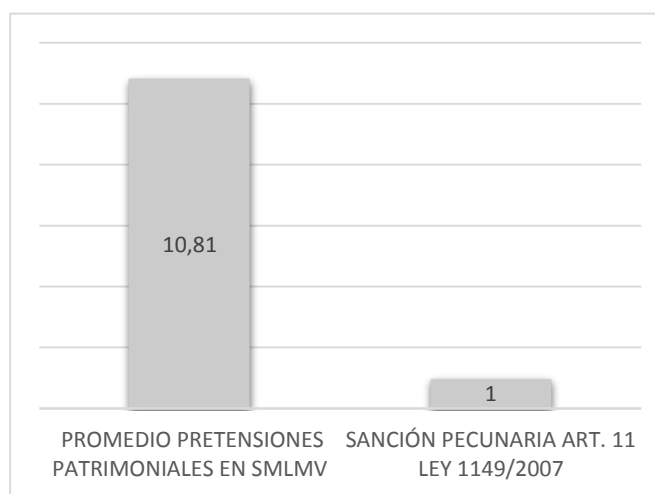


Figura 3. Comportamiento del equivalente en términos porcentuales de la sanción por inasistencia con respecto a las pretensiones patrimoniales demandadas conforme a la Ley 1149 de 2007

Fuente: Autores

En la tabla 4 se logra observar que el porcentaje de las sanciones por inasistencia injustificada respecto de las pretensiones patrimoniales aplicando la regla del artículo 77 del CPTSS disminuyen considerablemente sí se comparan con los estatutos procesales del CGP y el CPACA. En efecto, el máximo porcentaje es de 49,18% para una pretensión patrimonial de

1'500.000 pesos. Ahora bien, en la figura 3 se observa que la sanción pecuniaria representa el 16,95% de las pretensiones patrimoniales demandadas.

***Posibilidades para enfrentar el problema socio-jurídico de la sanción por injustificada inasistencia del artículo 372 del CGP***

Los análisis efectuados sobre las sentencias emitidas por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del municipio de San José de Cúcuta bajo la lógica del artículo 372 del CGP, el artículo 180 del CPACA y el artículo 77 del CPTSS, permiten concluir que no hay sustento razonable que permita un tratamiento diferencial para una conducta que adquiere una igual identidad dentro del marco del Derecho procesal. En efecto, cada estatuto procesal define sanciones pecuniarias diversas para la inasistencia injustificada de la audiencia inicial, siendo la del CGP desproporcional en comparación con los otros ordenamientos jurídicos procesales.

En ese orden, se observan dos posibles soluciones para que la sanción del artículo 372 del CGP reciba un tratamiento más acorde con la realidad manifiesta en las pretensiones y la situación socio-económica de los sujetos procesales. Primero, se encuentra la definición de un (1) salario mínimo como sanción pecuniaria para la inasistencia injustificada siguiendo la regla propia del CPTSS y considerando que puede ser aplicado el principio de igualdad que gobierna el Derecho. El principio de igualdad en el marco del Derecho no sólo designa un trato igual de cada hombre y mujer frente a la Ley, sino que además se extiende como lógica transversal a todo el ordenamiento jurídico y a la misma esencia del Derecho. Por ello, Rubio (1993) señala:

La igualdad designa un concepto relacional, no una cualidad de una persona, de un objeto (material o ideal), o de una situación, cuya existencia pueda ser afirmada o negada como descripción de esa realidad aisladamente considerada; es siempre una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre el resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos (en el caso límite, al menos una dualidad), los “términos de la comparación”, entre los cuales debe existir al mismo tiempo alguna diversidad, aunque solo sea espacial o temporal, pues de otro modo, como es obvio, no cabría hablar de pluralidad. La diferencia al menos numérica, entre los elementos comparados en condición de posibilidad del juicio de igualdad. (p. 640)

Siguiendo los planteamientos anteriores de Rubio Llorente, se puede inferir que es posible la aplicación del principio de igualdad que nutre el Derecho al problema socio-jurídico que representa la sanción pecuniaria por inasistencia injustificada del artículo 372 del CGP. Y es que en efecto, se puede equiparar la sanción pecuniaria a un objeto o a una situación cuya pluralidad de elementos se materializa en las tres versiones establecidas en los estatutos procesales explorados. Pues bien, la materia de cada uno de estos estatutos no marca una diferencia significativa que conlleve a que resulte imposible la aplicación de un juicio de igualdad.

Ahora bien, el otro camino que permite dar respuesta al problema socio-jurídico inmerso dentro de la sanción pecuniaria del artículo 372 del CGP es la adopción de un porcentaje variable considerando las pretensiones patrimoniales en controversia. De esta manera, se podría definir una sanción pecuniaria que oscile entre el 5% y el 15% de las pretensiones patrimoniales, y que sería definida por el juez considerando cada caso en particular. Pues si bien, se le otorga al juez la facultad de examinar y considerar la validez de las

justificaciones de fuerza mayor y caso fortuito para las inasistencias a las audiencias por parte de los sujetos procesales, resulta también posible que se le otorgue la potestad de valorar cada situación de manera particular sin desconocer, por un lado, el espíritu del legislador frente a la necesidad de imponer sanciones respecto de conductas inaceptables y/o temerarias como la inasistencia injustificada, y por otro, las pretensiones que de fondo conforman la intención del ciudadano de acudir a la justicia.

## **Conclusiones**

Los resultados del estudio permiten concluir que existe un trato diferencial injustificado frente a la sanción pecuniaria por inasistencia injustificada dentro del ordenamiento jurídico procesal colombiana. De manera específica, resulta desproporcional la sanción impuesta en el Proceso Verbal Sumario/Proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía regulados por el CGP en su artículo 372. No se encuentra justificación válida que permita sustentar la diferencia entre las sanciones por la misma conducta en otros estatutos procesales como el CPACA y CPTSS, y en esa medida, se genera inequidad sancionatoria al desconocer el principio de igualdad que gobierna el Derecho. Como se logra extraer de los datos y la información de este estudio, la aplicación del artículo 372 del CGP conlleva a sanciones que exceden en varios casos la totalidad de las pretensiones patrimoniales, y en la mayoría de los casos, la sanción supera el 40% de las pretensiones.

En ese sentido, resulta necesaria la modificación legislativa del inciso 4º del artículo 372 del CGP, y para ello, se encuentra la vía de unificación en donde se puede aplicar la sanción contemplada en el CPTSS que es de un (1) salario mínimo o la definición de un porcentaje variable que oscile entre el 5% y el 25%, y en donde el juez tendría la facultad para designar el mismo considerando las particularidades de cada uno de los casos. Estas propuestas



quedan abiertas a nuevos debates y otros estudios con el objeto de avanzar en el tema.

## **Referencias bibliográficas**

Azula Camacho (2016). *Manual de Derecho Procesal. Tomo III. Procesos de Conocimiento*. Bogotá D.C.: Temis.

Canosa, U. (2017). *Partes, terceros y apoderados*. En: H. Cruz (Edit). *El proceso civil a partir del Código General del Proceso* (pp. 133-146). Bogotá D.C.: Universidad de los Andes.

Canosa, U. (2013). *La prueba en los procesos orales civiles y de familia CGP. Ley 1564 de 2012, Decreto 1736 de 2012*. Bogotá D.C.: CSJ.

Corporación Excelencia en la Justicia (2013). *Observatorio al Código General del Proceso (OCGP). Documento del primer monitoreo con corte a diciembre 31 de 2013*. Bogotá D.C.: CEJ.

Cruz, H. (Edit.) (2017). *El proceso civil a partir del Código General del Proceso*. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes.

Diéguez, Y. (2011). El Derecho y su correlación con los cambios de la sociedad. *Derecho y Cambio Social*, 8(23), 1-28.

Flórez, A. y Lema, P. (2011). Sanción al actor popular por su inasistencia injustificada a la audiencia de pacto de cumplimiento en la jurisprudencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. *Tesis de grado*. Universidad de Medellín, Medellín, Colombia.

Garzón, O. (2017). El proceso verbal en el Código General del Proceso. *Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal*, (45), 149-187.

Larroucau, M. (2010). La buena fe procesal y el deber de colaboración de las partes en los procedimientos laborales. *Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, 1(1), 67-81.

Ley 1149 (2007, 13 de julio). Congreso de la República de Colombia: *Por medio de la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos*. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 46.688 del 13 de julio de 2007. Obtenido de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1149\\_2007.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1149_2007.html)

Decreto-Ley 2158 (1948, 24 de junio). Gobierno Nacional de Colombia: *Por medio del cual se establece el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social*. Bogotá D.C., Colombia.

Ley 712 (2001, 5 de diciembre). Congreso de la República: *Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo*. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 44.640 del 8 de diciembre de 2001. Obtenido de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0712\\_2001.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0712_2001.html)

Ley 1437 (2011, 18 de enero). Congreso de la República: *Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*. Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 47.956 del 18 de enero de 2011. Obtenido de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011\\_pr001.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html)

Ley 1564 (2012, 12 de julio). Congreso de la República: *Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones*.

Bogotá D.C., Colombia: Diario Oficial No. 48.489 del 12 de julio de 2012.  
Obtenido de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1562\\_2012.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html)

Proyecto de Ley 159 (2011 Senado) / Proyecto de Ley 196 (2011 Cámara).  
Congreso de la República: *Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones*. Bogotá D.C., Colombia. Gaceta No. 119 del 29 de marzo de 2011. Obtenido de: <http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/>

Consejo Superior de la Judicatura (2016). *Resultados del estudio de tiempos procesales*. Bogotá D.C.: CSJ.

Mabel, S. (2011). El Derecho como ciencia. *Invenio*, 14(26), 13-38.

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica*, (14), 5-39.

Rodríguez, F. (2014). La investigación jurídica básica y la investigación jurídica aplicada. *Justicia*, (25), 8-11.

Rubio, F. (1993). *La forma del poder. Estudios sobre la Constitución*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Rueda, M. (2017). *La raíz del Código General del Proceso. Una movida concéntrica*. En: H. Cruz (Edit). *El proceso civil a partir del Código General del Proceso* (pp. 33-78). Bogotá D.C.: Universidad de los Andes.

Sánchez, M. (2009). La investigación jurídica pura. *Ponencia presentada en el Conversatorio Investigación, ciencia y derecho: investigación científica e investigación jurídica*. Cajamarca, Perú, 21 de septiembre.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (13 de julio de 2018). Juzgado Primero Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201600421. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (13 de septiembre de 2017). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201600523. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Verbal Sumario “Rendición de Cuentas”. (25 de enero de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201600821. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta

Sentencia Proceso Monitorio (26 de abril de 2018). Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189002201600821. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta

Sentencia Proceso Ejecutivo. (02 de octubre de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201600954. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (19 de abril de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201700123. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (27 de febrero de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201700147. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (23 de julio de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201700386. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (27 de abril de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201700671. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (17 de julio de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201700815. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (16 de marzo de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201700956. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (17 de abril de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201700958. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta.

Sentencia Proceso Ejecutivo. (06 de septiembre de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201701262. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta

Sentencia Proceso Ejecutivo. (26 de septiembre de 2018). Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple *Jz. Carolina Serrano Buendía*. Cúcuta, Norte de Santander., Colombia. Radicación N° 540014189001201701468. San José de Cúcuta, Colombia: Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad de Cúcuta

Sentencia T-009 (2000, 18 de enero). Corte Constitucional. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá D.C., Colombia: Expediente T-235816. Obtenido de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/t-009-00.htm>

Sentencia T-001 (2016, 13 de enero). Corte Constitucional. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C., Colombia: Expediente T- 5.158.521. Obtenido de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-001-16.htm>

Sentencia T-199 (2016, 26 de abril). Corte Constitucional. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá D.C., Colombia: Expediente T- 5.310.874 y T- 5.301.697. Obtenido de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-199-16.html>

Sentencia de Casación 10840 (2018, 23 de agosto). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Bogotá D.C., Colombia: STC10840-2018. Radicado 2018-01342-01.

Torres, J. (2011). Temeridad y malicia procesales al banquillo. Crónica de dos lacras jurídicas que pretenden consolidarse. *Revista Internauta de Práctica Jurídica*, (27), 61-123.